

5304 REAL DECRETO 263/1990, de 23 de febrero, por el que se indulta a Antonio Pellicer Guinart.

Visto el expediente de indulto de Antonio Pellicer Guinart, condenado por la Audiencia Provincial de Lérida, en sentencia de 13 de marzo de 1981, como autor de un delito de robo con intimidación en las personas y otro de detención ilegal, a las penas de cuatro años y seis meses de prisión menor y diez años y un día de prisión mayor, rectificándose la sentencia al aplicarse la Ley Orgánica 8/1983, e imponiéndole la pena única de diez años de prisión mayor, asimismo condenado por la Audiencia Provincial de Barcelona en sentencia de 30 de mayo de 1981, como autor de un delito de robo con intimidación en las personas y en oficina bancaria, a la pena de cuatro años, dos meses y un día de prisión menor, y también condenado por la Audiencia Provincial de Barcelona en sentencia de 24 de octubre de 1985, como autor de un delito de robo a la pena de siete años de prisión mayor, todas ellas con las accesorias de suspensión de todo cargo público y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, y teniendo en cuenta las circunstancias que concurren en los hechos;

Vistos la Ley de 18 de junio de 1870, reguladora de la gracia de indulto; la Ley 1/1988, de 14 de enero, y el Decreto de 22 de abril de 1938;

De conformidad con el Ministerio Fiscal y el Tribunal sentenciador, a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de febrero de 1990,

Vengo en indultar a Antonio Pellicer Guinart del resto de la pena privativa de libertad pendiente de cumplimiento, condicionado a que no vuelva a cometer delito durante el tiempo de normal cumplimiento de la condena.

Dado en Madrid a 23 de febrero de 1990.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia.
ENRIQUE MUGICA HERZOG

5305 REAL DECRETO 264/1990, de 23 de febrero, por el que se indulta a Isabel Luján García del Rincón.

Visto el expediente de indulto de Isabel Luján García del Rincón, incoado en virtud de exposición elevada al Gobierno, al amparo de lo establecido en el párrafo segundo del artículo 2.º del Código Penal por la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Cuarta que, en sentencia de 1 de marzo de 1989, la condenó, como autora de un delito de robo con fuerza en las cosas, a la pena de cuatro años, dos meses y un día de prisión menor con sus accesorias de suspensión de todo cargo público y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, y teniendo en cuenta las circunstancias que concurren en los hechos;

Vistos la Ley de 18 de junio de 1870, reguladora de la gracia de indulto; la Ley 1/1988, de 14 de enero, y el Decreto de 22 de abril de 1938;

De conformidad con el Ministerio Fiscal y el Tribunal sentenciador, a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de febrero de 1990,

Vengo en conmutar a Isabel Luján García del Rincón la pena privativa de libertad impuesta, por la de un año de prisión menor, condicionado a que no vuelva a cometer delito durante el tiempo de normal cumplimiento de la condena.

Dado en Madrid a 23 de febrero de 1990.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia.
ENRIQUE MUGICA HERZOG

5306 REAL DECRETO 265/1990, de 23 de febrero, por el que se indulta a José María Vides López.

Visto el expediente de indulto de José María Vides López, incoado en virtud de exposición elevada al Gobierno, al amparo de lo establecido en el párrafo segundo del artículo 2.º del Código Penal por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y condenado por la Audiencia Provincial de Huelva, en sentencia de 2 de diciembre de 1988, como autor de un delito de malversación de caudales públicos, a la pena de doce años y un día de reclusión menor y ocho años de inhabilitación absoluta, con accesorias, y teniendo en cuenta las circunstancias que concurren en los hechos;

Vistos la Ley de 18 de junio de 1870, reguladora de la gracia de indulto; la Ley 1/1988, de 14 de enero, y el Decreto de 22 de abril de 1938;

De conformidad con el Ministerio Fiscal y el Tribunal sentenciador, a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de febrero de 1990,

Vengo en conmutar a José María Vides López la pena privativa de libertad impuesta, por la de tres años de prisión menor, manteniendo los demás pronunciamientos, y condicionado a que no vuelva a cometer delito durante el tiempo de normal cumplimiento de la condena.

Dado en Madrid a 23 de febrero de 1990.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia.
ENRIQUE MUGICA HERZOG

5307 REAL DECRETO 266/1990, de 23 de febrero, por el que se indulta a Diego Godoy Ortiz.

Visto el expediente de indulto de Diego Godoy Ortiz, condenado por la Audiencia Provincial de Badajoz, en sentencia de 7 de octubre de 1985, como autor de un delito de robo con fuerza en las cosas, a la pena de dos años, cuatro meses y un día de prisión menor, con las accesorias de suspensión de todo cargo público y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, y teniendo en cuenta las circunstancias que concurren en los hechos;

Vistos la Ley de 18 de junio de 1870, reguladora de la gracia de indulto; la Ley 1/1988, de 14 de enero, y el Decreto de 22 de abril de 1938;

Oído el Ministerio Fiscal y de conformidad con el Tribunal sentenciador, a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de febrero de 1990,

Vengo en indultar a Diego Godoy Ortiz del resto de la pena privativa de libertad pendiente de cumplimiento, condicionado a que no vuelva a cometer delito durante el tiempo de normal cumplimiento de la condena.

Dado en Madrid a 23 de febrero de 1990.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia.
ENRIQUE MUGICA HERZOG

5308 REAL DECRETO 267/1990, de 23 de febrero, por el que se indulta a Ildelfonso de la Encarnación Moreno Rodríguez.

Visto el expediente de indulto de Ildelfonso de la Encarnación Moreno Rodríguez, condenado por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Alicante, en sentencia de 18 de enero de 1985, como autor de un delito de tenencia ilícita de armas y depósito de municiones, a la pena de un año y seis meses de prisión menor, con las accesorias de suspensión de todo cargo público y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, y teniendo en cuenta las circunstancias que concurren en los hechos;

Vistos la Ley de 18 de junio de 1870, reguladora de la gracia de indulto; la Ley 1/1988, de 14 de enero, y el Decreto de 22 de abril de 1938;

Oído el Ministerio Fiscal y de conformidad con el Tribunal sentenciador, a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de febrero de 1990,

Vengo en indultar a Ildelfonso de la Encarnación Moreno Rodríguez del resto de la pena privativa de libertad pendiente de cumplimiento, condicionado a que no vuelva a cometer delito durante el tiempo de normal cumplimiento de la condena.

Dado en Madrid a 23 de febrero de 1990.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia.
ENRIQUE MUGICA HERZOG

5309 REAL DECRETO 268/1990, de 23 de febrero, por el que se indulta a Juan Quintana Aguiar y Víctor Carmona Rodríguez.

Visto el expediente de indulto de Juan Quintana Aguiar y Víctor Carmona Rodríguez, condenados por la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, en sentencia de 21 de septiembre de 1988,

como autores de un delito de robo con fuerza en las cosas, a la pena de cuatro años, dos meses y un día de prisión menor y a las accesorias de suspensión de todo cargo público y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena a cada uno de ellos, y teniendo en cuenta las circunstancias que concurren en los hechos:

Vistos la Ley de 18 de junio de 1870, reguladora de la gracia de indulto; la Ley 1/1988, de 14 de enero, y el Decreto de 22 de abril de 1938;

De conformidad con el Ministerio Fiscal y el Tribunal sentenciador, a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de febrero de 1990,

Vengo en indultar a Juan Quintana Aguiar y Víctor Carmona Rodríguez del total de la pena privativa de libertad impuesta, condicionado a que no vuelvan a cometer delito durante el tiempo de normal cumplimiento de la condena.

Dado en Madrid a 23 de febrero de 1990.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia.
ENRIQUE MUGICA HERZOG

5310 REAL DECRETO 269/1990, de 23 de febrero, por el que se indulta a Juan Luis Palancar Sánchez.

Visto el expediente de indulto de Juan Luis Palancar Sánchez, condenado por la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Séptima, en sentencia de 14 de marzo de 1985, como autor de un delito de robo con intimidación, a la pena de tres años de prisión menor y a las accesorias legales, y teniendo en cuenta las circunstancias que concurren en los hechos;

Vistos la Ley de 18 de junio de 1870, reguladora de la gracia de indulto; la Ley 1/1988, de 14 de enero, y el Decreto de 22 de abril de 1938;

De conformidad con el Ministerio Fiscal y el Tribunal sentenciador, a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de febrero de 1990,

Vengo en indultar a Juan Luis Palancar Sánchez del resto de la pena privativa de libertad pendiente de cumplimiento, condicionado a que no vuelva a cometer delito durante el tiempo de normal cumplimiento de la condena.

Dado en Madrid a 23 de febrero de 1990.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia.
ENRIQUE MUGICA HERZOG

MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA

5311 ORDEN de 26 de diciembre de 1989 por la que se autoriza a la Entidad «Seguros Lagun-Aro Vida, Sociedad Anónima», clave (C-683), para operar en el ramo de Vida.

Ilmo. Sr.: La Entidad «Seguros Lagun-Aro Vida, Sociedad Anónima», ha presentado en la Dirección General de Seguros solicitud de autorización para el ejercicio de la actividad aseguradora privada, con ámbito nacional y en el ramo de Vida.

De la documentación que se adjunta a la solicitud formulada se desprende que la Entidad «Seguros Lagun-Aro Vida, Sociedad Anónima», cumple los requisitos establecidos en la Ley 33/1984, de 2 de agosto, y en el Reglamento de 1 de agosto de 1985 (Real Decreto 1348/1985, «Boletín Oficial del Estado» del 3, 5 y 6).

En consecuencia, este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de Seguros, ha acordado lo siguiente:

Primero.-Autorizar a la Entidad «Seguros Lagun-Aro Vida, Sociedad Anónima», para el ejercicio de la actividad aseguradora privada con ámbito nacional y en el ramo de Vida, con arreglo al artículo 6 de la Ley 33/1984, y el Reglamento de 1 de agosto de 1985, sobre ordenación del seguro privado.

Segundo.-Inscribir en consecuencia a la Entidad «Seguros Lagun-Aro Vida, Sociedad Anónima», en el Registro Especial de Entidades Aseguradoras previsto en el artículo 40 de la Ley 33/1984, de 2 de agosto, conforme a lo dispuesto en el número 5 del artículo 6 de dicha Ley.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.

Madrid, 26 de diciembre de 1989.-P. D., el Secretario de Estado de Economía, Pedro Pérez Fernández.

Ilmo. Sr. Director general de Seguros.

5312 ORDEN de 26 de enero de 1990 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada en 28 de febrero de 1989 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en recurso contencioso-administrativo número 27.987, interpuesto por la Entidad «Corsan Empresa Constructora, Sociedad Anónima», contra un acuerdo del Tribunal Económico-Administrativo Central de fecha 29 de abril de 1986, sobre retención por el Impuesto sobre el Tráfico de las Empresas.

Ilmo. Sr.: Visto el testimonio de la sentencia dictada en 28 de febrero de 1989 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo -Sección Segunda- de la Audiencia Nacional en el recurso número 27.987, promovido por la Entidad «Corsan Empresa Constructora, Sociedad Anónima», contra un acuerdo del Tribunal Económico-Administrativo Central de fecha 29 de abril de 1986, sobre retención por el Impuesto sobre el Tráfico de las Empresas;

Resultando que concurren en este caso las circunstancias previstas en el artículo 105 de la Ley de 27 de diciembre de 1956,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la ejecución, en sus propios términos, de la referida sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando el presente recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Entidad «Corsan Empresa Constructora, Sociedad Anónima», contra un acuerdo del Tribunal Económico-Administrativo Central de fecha 29 de abril de 1986, ya descrito en el primer fundamento de Derecho de esta sentencia, sobre el Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas, debemos declarar y declaramos tal acuerdo contrario a Derecho, en cuanto deniegan el reintegro de lo retenido y, en consecuencia, lo anulamos en tal extremo, y declaramos el derecho de la parte actora a que le sea devuelta la cantidad de 92.944 pesetas, más los intereses de demora desde la fecha de la retención en la cuantía establecida en el artículo 36.2 de la Ley General Presupuestaria de 4 de enero de 1977. Y sin costas.»

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.

Madrid, 26 de enero de 1990.-P. D., el Subsecretario, Enrique Martínez Robles.

Ilmo. Sr. Director general de Tributos.

5313 ORDEN de 26 de enero de 1990 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada en 23 de mayo de 1989 por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-administrativo número 28.131, interpuesto por la Entidad «Obras y Construcciones, Sociedad Anónima», contra un acuerdo del Tribunal Económico-Administrativo Central de fecha 21 de mayo de 1986, sobre retención por el Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas.

Ilmo. Sr.: Visto el testimonio de sentencia dictada en 23 de mayo de 1989 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, de la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-administrativo número 28.131, interpuesto por «Obras y Construcciones, Sociedad Anónima», contra un acuerdo del Tribunal Económico-Administrativo Central de fecha 21 de mayo de 1986, sobre retención por el Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas;

Resultando que concurren en este caso las circunstancias previstas en el artículo 105 de la Ley de 27 de diciembre de 1956,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la ejecución en sus propios términos de la referida sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando el presente recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Entidad «Obras y Construcciones, Sociedad Anónima», contra un acuerdo del Tribunal Económico-Administrativo Central de fecha 21 de mayo de 1986 -ya descrito en el primer fundamento de derecho de esta sentencia-, sobre retención por el Impuesto General sobre Tráfico de las Empresas, debemos declarar y declaramos tal acuerdo contrario a derecho, en cuanto deniega el reintegro de lo retenido, y, en su consecuencia, lo anulamos en tal extremo, y declaramos el derecho de la parte actora a que le sea devuelta la cantidad de 192.449 pesetas, más los intereses de demora desde la fecha de la retención en la cuantía establecida en el artículo 36.2 de la Ley General Presupuestaria de 4 de enero de 1977. Y sin costas.»

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.

Madrid, 26 de enero de 1990.-P. D., el Subsecretario, Enrique Martínez Robles.

Ilmo. Sr. Director general de Tributos.